

ACTUAR PARA EVITAR LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES DEL GOBIERNO VASCO

Valoración del Acuerdo de Gobierno PNV-PSE

19 de diciembre de 2016



0-INTRODUCCIÓN

El pasado 8 de septiembre, previamente a la celebración de las elecciones al Parlamento Vasco del 25 de septiembre, ELA hizo público el documento *"Valoración de la acción del Gobierno Vasco 2012-2016 y propuestas para la siguiente legislatura"*. Dicho documento fue remitido a los partidos políticos que se presentaban a las elecciones.

Han pasado tres meses desde entonces y ya se ha constituido el nuevo Gobierno Vasco entre el PNV y el PSE-EE. En este documento ELA valora el contenido del Acuerdo de Gobierno alcanzado entre ambas fuerzas políticas.

I- VALORACIÓN DEL ACUERDO DE GOBIERNO PNV-PSE

El documento acordado entre ambos partidos es sumamente genérico. Está más dirigido a la propaganda y a decir cosas que suenan bien, pero que carecen de sustancia y concreción alguna. Basta como ejemplo el título del documento, *"Pilares para construir una Euskadi con más y mejor empleo, más equilibrio social, más convivencia y más y mejor autogobierno"*. Ese título ha sido machaconamente repetido en los medios públicos de EITB con el objetivo de dar la sensación de que el acuerdo contiene medidas que van en esa dirección. Nada más lejos de la realidad.

Lo mismo ocurre con referencias que son meros objetivos, como la de dejar la tasa de paro por debajo del 10% o reducir la pobreza un 20%. No hay en el acuerdo ninguna medida concreta para ello. Lo que sí hay es una utilización permanente de esos datos como propaganda del Gobierno.

El Acuerdo marca una clara línea de continuidad con las políticas neoliberales que se han aplicado en los últimos años. Ello no debe extrañar, si tenemos en cuenta que el Gobierno de Urkullu dio continuidad a las políticas de Patxi López, y que en los últimos años ha habido un acuerdo presupuestario (y en las Diputaciones) entre ambos partidos.

Entre los aspectos más destacados cabe señalar:

1. Renuncia a una reforma fiscal social y aceptación del déficit público que imponga Rajoy. De esta forma aplicarán una política presupuestaria que nos coloca a la cola europea en coberturas sociales

a) Ningún compromiso para cambiar la política fiscal

La política fiscal en la CAPV se gestiona por las Diputaciones Forales, pero se acuerda entre éstas y el Gobierno Vasco en el Órgano de Coordinación Tributaria. Cabe recordar que esta política fiscal se caracteriza por el enorme fraude fiscal existente en las rentas no salariales y por la escasa tributación legal de esas mismas rentas. Como consecuencia, la presión fiscal está muy por debajo de la media europea (en concreto, faltan al año 5.900 millones de euros para llegar a esa media). Es un ámbito en el que no existe ninguna

posibilidad de participación sindical y social, mientras que a la patronal sí la tienen en cuenta.

El acuerdo solo recoge un compromiso concreto sobre la fiscalidad, que es el de la *“realización de un Pleno Monográfico previo a las modificaciones”* que se vayan a hacer.

Y sobre la política fiscal ni siquiera se mencionan impuestos como el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades. Todo queda enmarcado en una referencia genérica a que se realice la *“actualización de la normativa fiscal precisa para incentivar la actividad económica, la innovación y el empleo, así como el sostenimiento de las políticas sociales y los servicios públicos esenciales”*, referencia que vale tanto para solicitar que se rebajen los impuestos al capital como para lo contrario.

El acuerdo elude de manera inaceptable el diagnóstico de lo que sucede en fiscalidad. Todo ello para seguir seguir colaborando con las rentas altas, de capital y empresariales, que cada vez pagan menos impuestos. Basta señalar lo que sucede con el Impuesto sobre Sociedades, a través del cual este año se van a recaudar menos de 1.100 millones de euros, casi 1.000 millones menos de lo que suponía en 2007 (en ese año se recaudaron 2.037 millones de euros por este impuesto en la CAPV).

b) El Gobierno renuncia a aplicar una política presupuestaria propia

El acuerdo indica que la *“gestión económica del Gobierno Vasco (...) debe seguir el principio de rigor y responsabilidad”*. Para ello habla de *“mantener el saneamiento de las finanzas y el compromiso con los objetivos de equilibrio presupuestario”*. Más en concreto, el nuevo Gobierno Vasco se compromete a *“mantener el objetivo de déficit público que corresponde a Euskadi y estabilizar el nivel de deuda pública, de conformidad con los objetivos establecidos por la Unión Europea y recogidos en el plan de estabilidad del Estado”*. Es decir, renuncia a aplicar una política presupuestaria propia y se decide hacer seguidismo de lo que cada año decida Rajoy.

En este sentido, cabe denunciar el teatro montado entre el Consejero de Hacienda del Gobierno Vasco (Pedro Azpiazu) y el Ministro de Hacienda (Cristóbal Montoro), que de una manera grotesca han escenificado un “acuerdo”, según el cual el Gobierno Vasco acepta aplicar los mismos límites de déficit público para 2016 y 2017 (0,7 y 0,6% del PIB respectivamente) que el Gobierno de Rajoy impuso al resto de comunidades autónomas. Es el mejor resumen de que la bilateralidad posible con el Estado español se limita a aceptar lo que éste quiere, dándole una apariencia de acuerdo.

c) Las políticas presupuestarias seguirán como hasta ahora

Como ha venido ocurriendo, los presupuestos van a seguir siendo restrictivos. Sin cambio de la política fiscal y asumiendo el límite de déficit público señalado por Rajoy, el Gobierno Vasco va a contar con unos presupuestos similares a los de los últimos años, que nos dejarán a la cola europea en Sanidad, Educación... A su vez, se renuncia a dar marcha atrás en los recortes aplicados en los últimos años en las prestaciones sociales:

- ✓ En Sanidad o Educación el texto no recoge ningún compromiso de avance en dotaciones presupuestarias. El único punto en el que tiene algo de concreción es el de las becas para la Educación, en el que dice que se van a destinar “55 millones de euros” al año. Pues bien, esa es la misma cantidad que se recoge en el Plan de Becas del Gobierno Vasco para 2016, por lo que no supone ningún avance.
- ✓ Cabe recordar que para alcanzar la media europea de recursos económicos destinados a la Sanidad o a la Educación, el presupuesto del Gobierno Vasco debería aumentar en 770 millones en Educación y en 1.540 millones en Sanidad.
- ✓ En materia de prestaciones económicas el Gobierno de Patxi López recortó, vía presupuestos, un 7% la cuantía de todas las prestaciones (incluida la RGI). A su vez, se dejó sin prestaciones a diversos colectivos al endurecer los criterios de acceso (aumento del período de empadronamiento de 1 a 3 años, por ejemplo). El gobierno de Urkullu siguió aplicando todos esos recortes, a lo que hay que añadir que, a través de Lanbide, se ha venido gestionando la RGI aplicando criterios aún más restrictivos, vulnerando los derechos de las personas perceptoras. El acuerdo de Gobierno nada dice de todo ello, lo que supone mantener todos esos recortes.
- ✓ Se anuncia una reforma y modernización de Lanbide que no se concreta. Bajo el habitual y vacío discurso de *“reforzar las funciones de orientación, formación e inserción en el mercado laboral, dando prioridad al acompañamiento en la búsqueda de empleo a colectivos con mayores dificultades y al diseño de itinerarios individualizados de inserción laboral”*, se plantea una reordenación que *“abordará la colaboración con los servicios sociales para la evaluación y gestión de las prestaciones económicas de carácter social”*. Curiosa manera de reconocer el fracaso de la transferencia de empleo y la creación de Lanbide, que con la justificación de acabar con el fraude en las prestaciones, asumió la gestión de la RGI, que estaba en manos de los servicios sociales. Habrá que ver qué es lo que se plantea realmente, ya que en estos últimos 4 años han sido varios los amagos de privatizar la gestión de los servicios públicos en este ámbito.

2. Renuncia a crear empleo y cobertura a la extensión de la precariedad

El acuerdo no recoge ninguna medida de creación de empleo (ni se compromete a reponer el empleo destruido en las distintas áreas del Gobierno, ni recoge medidas concretas de las que pueda deducirse que se van a generar nuevos puestos de trabajo). Todo queda en referencias genéricas como la de *“Aprobar, en el primer semestre de 2017, un Programa Marco de Empleo y Reactivación Económica con el objetivo de reducir las tasas de paro por debajo del 10% al final de la presente legislatura”*. Palabras que no dan ninguna pista de cómo se va a crear empleo. Es decir, palabras vacías.

En este tema llama la atención que ni siquiera se mencione en el acuerdo la palabra “precariedad”. Pero no solo eso, tampoco se hace referencia ni al empleo temporal ni al empleo a tiempo parcial. Ni mucho menos al creciente fenómeno de las trabajadoras o trabajadores pobres. Es una tomadura de pelo que solo se entiende desde la posición del

Gobierno de priorizar los ajustes presupuestarios y apoyar los intereses empresariales; clase empresarial que basa su apuesta para mejorar sus cuentas de resultados en la extensión de la precariedad y la flexibilidad laboral.

En coherencia con esa línea, el documento hace una referencia genérica a las OPEs, pero no plantea dar estabilidad a la plantilla del propio Gobierno, que bate récords en eventualidad, interinidad, etc.

El Plan estratégico de industrialización “*Basque Country 4.0*” tampoco ofrece apenas datos, más allá de establecer como objetivo que el peso de la industria alcance el 25% del PIB. De hecho, se mencionan cuestiones recurrentes como conceder ayudas públicas, incrementar el tamaño de las empresas, atraer inversiones extranjeras, ofertar suelo público a precios bajos, fomentar el I+D+i y la formación etc.

Sin embargo, apenas se dan datos e información, y lo que se da no se especifica. Así, todo queda en buenas intenciones y prácticamente nada de lo indicado será vinculante. Tampoco habrá manera de evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

3. Apuesta por un diálogo social vacío de contenido, pero financiado

Cuando las políticas que se aplican no dejan lugar a dudas sobre su orientación neoliberal, es evidente que el espacio que tiene el denominado “diálogo social” no es otro que el de acompañar a esas políticas. Es entendible, en todo caso, el interés que tiene todo gobierno en dar apariencia de consenso a unas políticas que perjudican a la mayoría social. Por eso, el Acuerdo entre PNV y PSE-EE sigue apostando por mantener esas mesas vacías de contenido, que quieren “institucionalizar” para hacerles llegar financiación pública.

El acuerdo de Gobierno recoge un apartado sobre este tema, en el que habla de “impulsar el diálogo social y la participación de los trabajadores en las empresas, reforzando los programas de apoyo económico e incentivos fiscales orientados a este objetivo”.

En línea con el acuerdo del 22 de julio entre el Gobierno, la patronal y CCOO y UGT (tercer y cuarto sindicato de la CAPV), el acuerdo de gobierno plantea dar pasos en la “*institucionalización*” del diálogo social, para poder justificar ese apoyo económico. Para ello cita que se “*creará un órgano permanente para el desarrollo de la participación institucional de los agentes sociales integrado por representantes del Gobierno Vasco y de las Organizaciones Sindicales y Empresariales más representativas que manifiesten su voluntad de participar institucionalmente en el mismo*”. Como se ve, prevén la ausencia de los sindicatos mayoritarios.

ELA denuncia que el Gobierno alimente con dinero público la domesticación del movimiento sindical y que financie a Confebask para que siga haciendo una labor de lobby contra un modelo de sociedad justo y solidario.

4. Continuar con un modelo insostenible, responsable del cambio climático

El acuerdo de gobierno se muestra complaciente con un modelo económico vasco que es insostenible, dejando de lado la necesaria apuesta por la transformación ecológica y social de la economía.

A tal punto llega el dislate del documento que en el apartado titulado de manera grandilocuente “*Un crecimiento sostenible*”:

- ✓ Hace una mención expresa a la apuesta por el Tren de Alta Velocidad. Seguir defendiendo hoy en día esa obra faraónica, de coste inasumible, grave impacto medioambiental y nulo beneficio social, va en contra de el “*modelo sostenible*” que se dice defender.
- ✓ No se habla de la estrategia energética del Gobierno (que va en otro bloque), que se ha caracterizado por la apuesta por las energías fósiles (petróleo, gas, ciclos combinados...), materia en la que tampoco se plantea ningún cambio.

5. El euskera, a un segundo plano

En términos discursivos, el acuerdo alcanzado entre el PNV y el PSE realiza un encaje de bolillos sobre el euskera, en el que éste queda mal parado. Así, se indica que “*El euskera es la lengua propia de Euskadi, no es la única, pero solo nosotros la poseemos. El euskera convive con la otra lengua que también es de Euskadi: el castellano. Las lenguas no son excluyentes, sino prueba de la diversidad, pluralidad e integración. Compartimos la necesidad de mejorar esa convivencia con el objetivo de que sea más igualitaria, más integradora y más armoniosa en un horizonte de mayor cohesión social*”. Estas palabras valen para defender cualquier postura. Lo que es evidente es que no son la base para desarrollar una política encaminada a corregir la clara situación discriminatoria que tiene el euskera frente al castellano.

6. Las mujeres, las grandes olvidadas

Las políticas del Gobierno Vasco contribuyen al incremento de las desigualdades sociales. De este modo, la renuncia a abordar el reconocimiento de derechos como el acceso a la vivienda, a la cobertura de las situaciones de dependencia, o el acceso a la educación infantil gratuita, repercuten en que las mujeres terminen haciéndose cargo del trabajo de cuidado de las personas que no tienen posibilidad de acceder a un servicio público. El empeoramiento de los servicios públicos de sanidad, educación o servicios sociales tiene el mismo efecto.

La apuesta por un empleo cada vez más precarizado, en sus diversas vertientes, deja a las mujeres en peor situación, tanto en el ámbito del empleo remunerado como en el ámbito doméstico.

Lo mismo se puede decir de la política de recortes de las prestaciones sociales. No es casualidad que la mayor tasa de pobreza se produzca en hogares monoparentales (en su inmensa mayoría mujeres).

Todas estas políticas tienen una lectura de género a la que es ajeno el acuerdo de gobierno. Se puede decir que, dada la situación que viven las mujeres, estas son las grandes olvidadas del mismo.

7. Sin acuerdo sobre la “actualización del pacto estatutario vasco”

La supuesta falta de consenso entre el PNV y el PSE en lo que se refiere al marco jurídico político no ha sido obstáculo para alcanzar un acuerdo de gobierno. Es claro que la denominada actualización del pacto estatutario vasco no es una prioridad para ninguno de los dos partidos que han firmado dicho acuerdo.

Junto a la ausencia de contenidos o fechas concretas para esa actualización, llama la atención que el acuerdo deja las manos libres a ambos partidos, ya que *“los firmantes de este acuerdo nos reconocemos mutuamente libertad para defender en dicha ponencia nuestros respectivos postulados y planteamientos en materia de autogobierno”*.

Además, se hace una apuesta por respetar el procedimiento recogido en el marco jurídico: acuerdo en el Parlamento Vasco, negociación con Madrid y sometimiento del acuerdo a referéndum. Un brindis al sol en el que nadie cree, a la vista del ansia recentralizadora (en plena involución) y represiva del gobierno español. En realidad, son palabras estudiadas que tienen un claro significado: aceptar el veto del Estado a cualquier cambio y renunciar por completo a la confrontación democrática con quienes, de manera estructural, niegan el derecho a decidir a nuestro pueblo.

Lo más probable es que estemos ante otra legislatura perdida en la que se calculen los tiempos para que suceda lo mismo que en la que hemos dejado atrás.

II- CONCLUSIONES

El acuerdo de Gobierno firmado entre el PNV y el PSE marca una línea de continuidad con las políticas neoliberales aplicadas en los últimos años. El Acuerdo supone:

- ✓ La renuncia a una reforma fiscal social y la aceptación del déficit público que imponga Rajoy. De esta forma se condena a seguir una política presupuestaria que nos coloca a la cola europea en coberturas sociales.
- ✓ Da cobertura a la política empresarial, que busca la mejora de las cuentas de resultados extendiendo la precariedad y la flexibilidad laboral. No recoge ninguna medida de creación de empleo y ni siquiera menciona conceptos como “precariedad”, “empleo temporal”, “empleo a tiempo parcial” o “trabajadoras o trabajadores pobres”.

- ✓ Apuesta por un diálogo social vacío de contenido, pero eso sí, financiado. El Gobierno Vasco va a crear nuevas mesas vacías de contenido, que se lubricarán con financiación pública, en línea con el acuerdo del 22 de julio firmado entre el Gobierno, la patronal y CCOO y UGT (la minoría sindical).
- ✓ Ser complaciente con un modelo económico insostenible y dejar de lado la necesaria apuesta por la transformación ecológica y social de la economía.
- ✓ Renunciar a desarrollar una política encaminada a corregir la clara situación discriminatoria que tiene el euskera frente al castellano. El euskera queda en un segundo plano.
- ✓ Las políticas de recortes o de negación de derechos sociales tienen una especial repercusión negativa en las mujeres, que son las grandes olvidadas del acuerdo.
- ✓ La supuesta falta de consenso entre el PNV y el PSE en lo que se refiere al marco jurídico político no ha sido obstáculo para alcanzar un acuerdo de gobierno. Los firmantes confían en un trato bilateral con el Estado que no existe. La falta de concreción nos hace pensar que nos encontremos ante otra legislatura perdida.

De confirmarse esta línea de trabajo corremos el riesgo de sufrir cuatro años más de políticas neoliberales. Ante ello, ELA:

- ✓ Se compromete a impulsar la movilización social en favor de un cambio radical de las políticas que se aplican, para demandar el cumplimiento de las reivindicaciones realizadas en el documento presentado el pasado 8 de septiembre.
- ✓ Hace falta pedagogía política para que se vea que las alternativas son posibles. Y hace falta una voluntad clara de hacer oposición política al neoliberalismo vasco, ahora protagonizado por el PNV y el PSE-EE. Unos partidos que, cuando sea preciso, contarán con el apoyo del PP porque comparten los ejes centrales de la política neoliberal.
- ✓ Insiste en la necesidad de que en el debate político y social las fuerzas de izquierdas den centralidad a los elementos basados en los derechos sociales, laborales, medioambientales, etc. Se tiene que visualizar que existen alternativas reales y oposición real a las políticas que están provocando un empobrecimiento generalizado de la población para beneficiar a una minoría. Es justo lo contrario a lo sucedido en Araba, donde EH Bildu va a aprobar los presupuestos de la Diputación Foral de Araba, que no se diferencian del planteamiento neoliberal del resto de territorios y que suponen seguir con la misma política fiscal llevada hasta ahora.